



Iconos. Revista de Ciencias Sociales

ISSN: 1390-1249

revistaiconos@flacso.org.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales

Ecuador

Aruguete, Natalia; Zunino, Esteban

Diario Clarín y sus fuentes de información. Un estudio de caso
Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 46, mayo, 2013, pp. 15-31
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Quito, Ecuador

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50926335002>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Diario Clarín y sus fuentes de información. Un estudio de caso

Clarín Journal and its Informational Sources: A Case Study

Natalia Aruguete

Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

Correo electrónico: nataliaaruguete@gmail.com

Esteban Zunino

Doctorando en Ciencias Sociales y Humanas. Becario CONICET y profesor de la Universidad Juan Agustín Maza, Argentina.

Correo electrónico: estebanzunino@hotmail.com

Fecha de recepción: diciembre 2012

Fecha de aceptación: marzo 2013

15

Resumen

El llamado “conflicto del campo”, que tuvo lugar en la Argentina en el año 2008, inauguró un escenario de confrontación entre el Gobierno nacional y las principales corporaciones agrarias del país. El diario *Clarín* hizo una profusa cobertura de este caso, que puede ser abordada desde diversas dimensiones. En este trabajo se analiza puntualmente la relación que este matutino entabló con sus fuentes de información durante los meses más álgidos de la controversia desatada entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el agro pampeano (marzo-julio de 2008). La base conceptual de este estudio es la teoría del *Indexing*. Se procura indagar si el tipo de tratamiento que *Clarín* dio a las fuentes oficiales y no oficiales puede ser explicado por la hipótesis de esta teoría.

Descriptores: Diario Clarín, fuentes de información, Indexing, conflicto del campo, Cristina Fernández de Kirchner, Argentina.

Abstract

The land dispute or so called “*conflicto del campo*” that took place in Argentina in 2008 lead to a situation of confrontation between the national government and the country’s main agricultural corporations. The *Clarín* journal covered this case extensively, and its news reporting can be tackled from various viewpoints. This article specifically analyzes the relationship this morning paper initiated with its informational sources during the most critical months following the controversy unleashed between the Cristina Fernández de Kirchner administration and the Pampean agricultural community (March-July 2008). The conceptual base of this study is the Indexing Theory. This article enquires whether or not the treatment the *Clarín* gave to both official and unofficial sources might be explained by this theory.

Keywords: Clarín journal, informational sources, Indexing, conflicto del campo, Cristina Fernández de Kirchner, Argentina.



Introducción

El llamado “conflicto del campo”, que tuvo lugar en la Argentina en el año 2008, inauguró un escenario de confrontación entre importantes sectores del poder político, fundamentalmente, el Gobierno nacional y las principales corporaciones agrarias del país. La relevancia de este fenómeno está dada por dos rasgos que lo vuelven inédito. Por un lado, la confluencia de actores del agro que históricamente representaron intereses distintos y hasta contrapuestos; por el otro, el inicio de un proceso de confrontación que tuvo como protagonistas al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a los principales conglomerados mediáticos del país. Con dicha disputa como contexto cobró vigor un fuerte y público enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Grupo Clarín, cuyo corolario fue la sanción de una nueva ley que regula los servicios de comunicación audiovisual en la Argentina¹ (Bizbergue, Mastrini y Becerra, 2011).

Al cubrir los asuntos políticos, los medios de comunicación mantienen una tensa relación con el espacio público, que evidencia la correlación de fuerzas entre actores que tratan de imponer su visión de los hechos. Como resultado de tal disputa, la palabra oficial suele prevalecer por sobre otras perspectivas y experiencias. ¿Pero qué sucede con la cobertura mediática cuando una polémica se da en un ámbito donde las fuentes no oficiales detentan un poder significativo, al punto de poner en riesgo la propia gobernabilidad? Esta pregunta es clave frente al fenómeno que aquí se analiza, ya que las corporaciones del agro tuvieron históricamente la capacidad de influir en las decisiones políticas de los gobiernos argentinos. En el marco de un conflicto que significó un punto de inflexión en la relación medios-poder político, resulta relevante analizar el tratamiento que *Clarín*, el diario más importante del país, dio a sus fuentes de información, para comprender la correlación de fuerzas establecida entre funcionarios públicos, entidades agropecuarias y el propio medio a la hora de transmitir una visión de los hechos.

Esta motivación encausa tres objetivos específicos: 1) Explorar el espacio que el diario *Clarín* dio a los distintos actores en función de la contención institucional que tuvieron, su cercanía al poder y su posicionamiento frente a la política de retenciones. 2) Indagar en qué medida el tipo de tratamiento que el matutino dio a sus fuentes puso en evidencia el enfrentamiento desatado entre este conglomerado mediático y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de este conflicto. 3) Discutir si los rasgos de esta cobertura, es decir, el tratamiento dado a las fuentes de información, logran ser explicados por las premisas de la teoría del *Indexing* o si su comportamiento excede los alcances de esta perspectiva.

1 El 10 de octubre de 2009, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que, entre otras cosas, obliga a los principales multimedios del país a desprenderse de licencias con el objetivo de desconcentrar el mercado audiovisual. La norma completa puede consultarse en <http://tinyurl.com/blvr63c>

La elección de este periódico resulta elocuente, no solo porque se convirtió en el conglomerado mediático más importante de Argentina, producto de la ausencia de restricciones al proceso de concentración en el sector infocomunicacional desde comienzos de la década de 1990 hasta la actualidad (Aruguete, 2003; Becerra y Mastriani, 2009), sino, además, por los intereses directos que el multimedios tiene en el sector agrario. Junto con el diario *La Nación* controla, desde 2007, el 50% de Expoagro, la muestra agropecuaria a campo abierto más grande del país, que presenta en sus estands a productores argentinos y extranjeros de semillas, agroquímicos y otros insumos para el campo (Giarraca, 2010).

Del estudio realizado sobre la cobertura de fuentes hecha por *Clarín*, a lo largo de los 128 días que duró el conflicto, surge que no prevaleció el punto de vista de los funcionarios del Gobierno nacional; por el contrario, la incidencia de los actores e instituciones externos a los poderes del Estado fue mayor al 60%. Sin embargo, la significativa participación de voces no oficiales no supuso una mayor diversidad y democratización de las ideas de los actores involucrados en este fenómeno. Las fuentes predominantes pertenecían a las corporaciones agrarias, que históricamente detentaron un significativo poder en su capacidad de influir en las decisiones políticas de gobiernos democráticos y dictatoriales por igual.

Medios y fuentes de información. La teoría del *Indexing*

Las fuentes de información, materia prima de las noticias, son actores que suministran datos en su calidad de integrantes de grupos o sectores con algún grado de interés en el asunto, aun cuando parezcan remotamente alejados de éste. Pero el real acceso de las fuentes a las agendas mediáticas depende del tipo de actores de que se trate, de su nivel político, sociocultural y económico, y de su cercanía al poder oficial (McQuail, 1998).

Entre fuentes, medios y audiencias no se da un vínculo simple y lineal, sino una relación espinosa en la que se pone en juego la capacidad de imponer la perspectiva desde la que se interpretan los hechos que se incluyen en la agenda. En esta tensa convivencia, los periodistas suelen transmitir la información provista por las agencias gubernamentales en forma casi literal, dado que éstas exhiben un factor de autoridad que les otorga mayor verosimilitud (VanSlyke Turk, 1986). Con lo que la versión oficial de los hechos se impone por sobre otros puntos de vista y experiencias.

Cuando las coberturas están destinadas a los asuntos políticos, los medios suelen poner el foco en las acciones y reacciones del Gobierno frente a otras instituciones con ideas diferentes y, a veces, radicalmente opuestas. En estos escenarios, los periodistas recurren a actores situados en posiciones de autoridad.

En su estudio sobre la relación entre los medios y sus fuentes de información, Bennett (1990) acuñó el término “*Indexing*” para referirse al orden que los profesio-

nales de la información asignan a la gama de voces y puntos de vista en sus noticias. Tal estructuración de temas y fuentes, señala el autor, suele ser elaborada en función de la visión dominante de los gobiernos acerca de un asunto determinado (Bennett, 1996; Bennett et al., 2004). Así, la industria noticiosa cede a las instituciones oficiales el rol de vigilarse a sí mismas, vulnerando el equilibrio democrático (Bennett, 1990).

Al ceder el monopolio noticioso a los funcionarios públicos –producto de las relaciones “transaccionales” y “simbióticas” que forjan con ellos–, los medios restringen la diversidad de ideas (Bagdikian, 1985). Aun en aquellas ocasiones en las que se abre el espectro y se introducen nuevas perspectivas, estas desviaciones respecto de la postura oficial no adquieren mayor importancia (Crouse, 1973; Gitlin, 1980; Tuchman, 1972), pues al ser incluidas ocasionalmente –mediante coberturas superficiales, con un tratamiento personalizado, dramatizado y fragmentado– en reportes sobre infracciones, situaciones de violencia o comportamientos desacreditados, rápidamente se desvanecen y quedan fuera de la agenda (Bennett, 1991). Esta limitación del registro de voces no surge de una censura declarada sino de las propias rutinas periodísticas, donde se decide el ámbito de las fuentes informativas positivas, legítimas y creíbles.

En el marco de este trabajo, se toma la definición de fuentes oficiales dada por Steele, quien denomina como tales a los funcionarios o instituciones pertenecientes al ámbito estatal o gubernamental y a las fuentes no-oficiales como “cualquier individuo que no es un funcionario elegido o un miembro de la Administración (Gobierno) o un integrante del Congreso” (Steele, 1997: 85-86). En el mismo sentido, Hallin, Manoff y Weddle (1993) diferencian a las fuentes estatales (*statist sources*) de las fuentes no gubernamentales o civiles (*civil sources*) como los grupos civiles, los analistas políticos independientes y las organizaciones de presión.

Ahora bien, la recurrencia de los periodistas a distintos tipos de fuentes depende del fenómeno analizado y de la coyuntura en que éste se inserta. Cuando se abordan temas polémicos, en los que existe un debate con posturas diferentes, más fuentes son consultadas y más importancia se les da en los medios. Ejemplo de este tipo de escenarios son las controversias políticas, en las cuales las fuentes oficiales corren el riesgo de perder credibilidad, producto de la polémica en la que están inmersas (Amadeo, 2008). En tales circunstancias, la convocatoria a actores informales o extraoficiales es mayor, aunque su tratamiento no cuenta con pautas tan claras.

En el caso estudiado, se destaca el hecho de que las fuentes extraoficiales han detentado históricamente un poder extraordinario en el ámbito político y económico argentino. En vistas de ello, este trabajo se propone analizar la correlación de fuerzas entre un gobierno nacional que quiso impulsar una política pública y un sector con un alto poder de veto, que se enfrentó a la iniciativa gubernamental al ver afectados sus intereses económicos y terminó ganando la pulseada. Al menos, en el corto plazo.

La Resolución N° 125 y el conflicto campo-gobierno

El gran poder económico y político que adquirió el sector agrario radica, principalmente, en que, excepto en períodos históricos precisos, Argentina ha tenido un perfil predominantemente agroexportador, acompañado por un reparto desigual de la tierra en favor de un núcleo concentrado de familias tradicionales. Esto dio a los principales actores vinculados al agro nacional un gran poder de voto e influencia en las decisiones de los gobiernos de turno.

La Resolución N° 125, anunciada el 11 de marzo de 2008 por el Poder Ejecutivo, fijaba un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones de algunos productos primarios. Dicha política sobre los derechos de exportación implicaba un aumento de los gravámenes que debían abonar al Estado las ventas de soja y girasol al exterior, principal negocio del sector. Paralelamente, se procuraba aplicar un esquema móvil que ligara la evolución de estos impuestos a la cotización de los granos en el mercado internacional.

El gobierno de Cristina Fernández perseguía tres objetivos: por un lado, capturar parte de la renta extraordinaria del agro pampeano², que se generaba no solo por la alta cotización de los *commodities*³ sino también por la llamada “renta diferencial internacional”, producto de las ventajas que dan la calidad de los suelos y el clima argentinos (Flichman, 1977); por otro, cortar la relación entre la evolución de los precios internacionales y los precios del mercado interno; finalmente, detener la extensión de la soja como monocultivo en una creciente área del país⁴. La iniciativa generó la reacción inmediata de las entidades más representativas y poderosas del agro, que, al ver afectada su rentabilidad, confluyeron en un espacio autodenominado “Mesa de Enlace”. Desde allí impulsaron las principales medidas de lucha, como los cortes de ruta y el cese en la comercialización de granos y hacienda.

El Gobierno modificó la Resolución N° 125 después de arduas negociaciones con estas entidades, pero no pudo llegar a acuerdos sustanciales. Tal fue la presión ejercida por la Mesa de Enlace mediante diversas estrategias, que la norma fue enviada al Congreso Nacional para su tratamiento. Tras su aprobación, en una votación reñida en la Cámara de Diputados, fue derogada por el Senado de la Nación en julio de 2008.

Lo inédito del enfrentamiento desatado en torno a la implementación de este esquema de retenciones es la cohesión que alcanzaron corporaciones tradicionales del

² El término “agro pampeano” hace referencia a los sectores agropecuarios de las provincias pampeanas y litoraleñas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Sur de Corrientes (Barsky y Gelman, 2009).

³ Los *commodities* o productos básicos son bienes genéricos, producidos masivamente, y que presentan un bajo nivel de diferenciación o especialización. Se define como tales a las materias primas como los granos (soja, trigo, maíz), la energía (petróleo, fuel oil, gas natural), los metales (oro, plata, cobre), las carnes (bovina, porcina) y aun los productos financieros (bonos).

⁴ Según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (2011), Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja y aceite de soja, y el tercer exportador mundial de porotos de soja. Informe completo disponible en <http://tinyurl.com/cg69oh3>

campo, como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con otras como la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), que históricamente representaron intereses diferentes y, en ocasiones, hasta contrapuestos (Basualdo y Arceo, 2009).

La acción conjunta de entidades agropecuarias, que históricamente representaron a sectores diferentes, se explica por las profundas transformaciones de la fisonomía del agro nacional en las últimas décadas. En efecto, la implementación de políticas neoliberales entre la década del 70 y finales del 90 confluyeron en un nuevo escenario caracterizado por la concentración creciente de la propiedad de la tierra, la tecnologización del agro, una tendencia cada vez mayor al monocultivo y el reemplazo de la agricultura familiar por un manejo empresarial de las unidades productivas (Zunino y Aruguete, 2012: 33).

Este escenario económico, iniciado en Argentina después de la crisis económica y la devaluación de la moneda nacional en 2002, benefició principalmente a los sectores exportadores, que aliviados en sus compromisos con el sector financiero externo por la pesificación de sus deudas, contaron con un contexto internacional de precios altos para sus principales productos. En este favorable contexto fue anunciada la Resolución N° 125, con la que el Gobierno pretendió capturar una porción mayor de la renta agraria y redireccionarla hacia otros sectores, por intermedio de planes sociales y programas de educación, salud y empleo.

El *lobby* desplegado por la Mesa de Enlace hizo que, finalmente, la norma fuera rechazada en el Senado a partir del desempate del Vicepresidente Julio Cleto Cobos, quien se pronunció en contra de la iniciativa. El desenlace de esta puja de poder resulta revelador por tratarse de un sector que se ha redimensionado a partir de la convergencia de grandes propietarios, tomadores de tierras (*pools* de siembra), capital financiero (fondos de inversión) y servicios de terceros, como por ejemplo los estudios agronómicos, que sirven a esta nueva lógica de producción agropecuaria. Este nuevo actor, que mantiene una nueva relación con diversas instituciones –entre las que se destacan los medios de comunicación–, constituye el núcleo duro del “agronegocio sojero” (Giarraca, 2010). Dada la vinculación del Grupo Clarín con el agronegocio⁵, resulta relevante analizar la correlación de fuerzas entre los actores vinculados a este fenómeno a partir del análisis del tratamiento que este matutino dio a sus fuentes de información.

5 Durante 2008, de las veinte mayores exportadoras de Argentina, once se dedicaban directamente al agronegocio y otras dos –Ford y Siderca– lo hacían colateralmente como proveedoras de productos para “el campo”, siendo ambas patrocinadoras de Expoagro; es decir, trece de estas veinte compañías tuvieron vinculación con el Grupo Clarín en Expoagro, al participar del evento como expositoras o patrocinadoras.

La historia del Grupo Clarín

Clarín fue creado en 1945 por el estanciero fundador del Socialismo Independiente Roberto Noble. Es un tabloide que, pese a caracterizarse por la prudencia con gobiernos militares como democráticos, ha tenido una fuerte influencia en las decisiones de los poderes de turno. “Es el principal diario argentino y el de mayor circulación en el mundo de habla hispana” (Albornoz, 2006: 124), con una tirada promedio de 262 852 ejemplares de lunes a sábado y de 576 939 los días domingo⁶. El diario acapara el 31% de la circulación de periódicos del país e integra el principal multimedios de la Argentina. Además, tiene un significativo poder de influencia en otros medios gráficos, incluso en los de mayor circulación, como *La Nación*⁷ (Casermeiro, 2004: 215), lo que “robustece su centralidad a la hora de erigirse como referencia para la construcción de la agenda pública y mediática” (Becerra y Mastrini, 2009: 65).

En la década del noventa, el Grupo Clarín comenzó su expansión hacia otras ramas de la industria cultural, con su participación tanto en la radiodifusión como en la campo televisivo, llevando adelante una política expansiva basada en el endeudamiento externo, que lo tuvo muchas veces al borde del colapso financiero. En ese marco, fue clave la estrecha relación que mantuvo con el poder político a lo largo de varios años.

Con la devaluación de la moneda nacional en 2002 y una deuda que ascendía a los 1000 millones de dólares, el Grupo estuvo cerca de la cesación de pagos. Sin embargo, gracias a su claro poder de *lobby*, consiguió que el gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003) pasara a moneda nacional las obligaciones contraídas con la banca local. En 2003, el Congreso Nacional promulgó la Ley N° 25.750 de “Preservación de Patrimonios Culturales”, conocida como “Ley Clarín”, gracias a la cual se restringió la participación del capital extranjero a un 30% del capital accionario. De este modo, el *holding* quedó a salvo de la entrada al mercado de nuevos grupos que significaran una posible amenaza a su situación monopólica.

A través de Arte Gráfico Editorial Argentino (Agea), *Clarín* es propietario del diario deportivo *Olé*, el periódico gratuito *La Razón* y las revistas *Elle* y *Genios*. También en el terreno de la gráfica controla la Compañía Inversora de Medios de Comunicación S.A. (Cimeco), propietaria de diarios del interior del país como *Los Andes*, de Mendoza; *La Gazeta*, de Tucumán y *La voz del Interior*, el diario más importante de la provincia de Córdoba y uno de los de mayor tirada del país (Albornoz, 2006: 124). Además, participa de la agencia de noticias *Diarios y Noticias* (DyN).

En el ámbito de la radiodifusión, es propietario además de Radio Mitre, de FM 100 y de Radio Mitre de Córdoba y Mendoza. Por intermedio de Arte Radiotelevisivo

⁶ Fuente: Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). Promedio de circulación neta de lunes a domingo entre diciembre de 2012 y febrero de 2013. Información disponible en <http://www.ivc.org.ar/>

⁷ Cabe aclarar que, tal como lo demostró Casermeiro (2004), entre *Clarín* y *La Nación* existe una influencia recíproca.

Argentino S.A. (Artear) controla Canal 13 de Buenos Aires y los canales de cable Todo Noticias (TN), Volver, Magazine, Metro y un porcentaje de Canal Rural, además de los canales 6, de Bariloche; 7, de Bahía Blanca y 12, de Córdoba. Y en el mercado del cable, el Grupo Clarín protagonizó en 2007 la mayor operación que expresa la concentración del mercado argentino. Por la suma de 1100 millones de dólares, Múlticanal tomó el control de Cablevisión, su principal competidora a nivel nacional. La suma de las dos empresas acapara el 48,9% del mercado argentino (Krakowiack, 2011) y abrió nuevos negocios, producto de la convergencia tecnológica. A través del cableado de fibra óptica, el Grupo tiene una participación del 32,5% del mercado de Internet del país a través de sus empresas Fibertel, Ciudad Internet y Flash.

En los últimos años ha diversificado aún más sus negocios. En sociedad con el matutino *La Nación* organiza todos los años “Expoagro”, la muestra agropecuaria a campo abierto más importante del país. La misma reúne en cada una de sus ediciones a los principales actores vinculados al sector agropecuario, situación que refuerza el interés de analizar la cobertura mediática de este periódico sobre la implementación de la Resolución N° 125.

En el año 2007, Artear incrementó su participación en dos de las mayores productoras de contenidos para TV: Ideas del Sur y POL-KA. Paralelamente, controla el 50% de Torneos y Competencias (TyC) y el 50% de Televisión Satelital Codificada (TSC), empresas que hasta 2009 monopolizaban las transmisiones de eventos deportivos que se vendían a través de señales codificadas. El 11 de agosto de ese año, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rescindió el contrato que tenía con TyC hasta 2014 y se asoció con el Estado para la transmisión de los partidos de fútbol por el sistema de televisión abierta.

La posición dominante del Grupo, en buena medida posibilitada por la buena relación del *holding* con los gobiernos de turno, tuvo un punto de quiebre en el año 2008. En medio del conflicto entre las principales corporaciones agrarias del país y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se inició un proceso de acusaciones cruzadas. En ese marco “cobró vigor un fuerte y público enfrentamiento entre el Gobierno y *Clarín*. Fue entonces que la presidenta Fernández de Kirchner lanzó la propuesta de modificar la Ley de Radiodifusión 22.285/80 vigente desde la dictadura” (Bizberge, Mastrini y Becerra, 2011: 9).

Dicha iniciativa fue ratificada por el Congreso Nacional el 10 de octubre de 2009 con la sanción de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. La nueva norma, entre otras cosas, obliga al Grupo Clarín a desprenderse de licencias y medios con el fin de desconcentrar el mercado audiovisual. Si bien en su artículo 161 se establecía un plazo de un año para la adecuación de los multimedios que excedieran los límites impuestos por la nueva regulación, una oleada de recursos legales le ha permitido al Grupo no desinvertir hasta el momento.

Trabajo empírico

Objetivos y preguntas de investigación

El objetivo de este trabajo es analizar la cobertura del llamado “conflicto campo-gobierno” hecha por *Clarín*, poniendo énfasis en el tratamiento que este matutino dio a sus fuentes de información. Los objetivos específicos son tres: a) Explorar el espacio que el diario *Clarín* dio a los distintos actores en sus páginas, en función de su contexto institucional, su cercanía al poder y su posicionamiento frente a la política de retenciones. b) Indagar en qué medida el tratamiento dado a tales fuentes de información pone en evidencia el enfrentamiento desatado entre el Grupo Clarín y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del llamado “conflicto campo-gobierno”⁸. c) Discutir si este tipo de cobertura responde a las premisas de la teoría del *Indexing* o si su comportamiento no logra ser explicado por dicha perspectiva.

De tales objetivos se desprende una serie de preguntas de investigación: a) ¿Qué actores prevalecieron en la cobertura de *Clarín* como fuentes de información? ¿La presencia de fuentes oficiales fue mayor a las de las no oficiales? ¿En qué medida la posición de los distintos actores frente a la política de retenciones se vio reflejada en la recurrencia de este periódico a las distintas fuentes de información? b) ¿El enfrentamiento desatado entre el Grupo Clarín y el Gobierno es congruente con el tipo de fuentes predominantes en la cobertura de este caso? c) ¿Se cumple la hipótesis del *Indexing*, según la cual en las coberturas noticiosas prevalece la visión oficial de los hechos?

23

Método

Este estudio se apoyó en la metodología del análisis de contenido⁹. En primera instancia se computaron como unidades de análisis los artículos publicados en el cuerpo principal de la edición impresa del diario *Clarín*, referidos a lo que se denominó “conflicto campo-gobierno”, entre el 12 de marzo y el 17 de julio de 2008. Se incluyeron notas de todos los géneros y se revisaron todas las secciones, con excepción de los suplementos especiales.

Con el relevamiento de estas unidades quedó conformado un universo de análisis de 1488 artículos. A partir de esta población se creó una muestra integrada por 500 artículos a los efectos de llevar el corpus a una dimensión abordable. Para la conformación de la muestra se estableció un margen de error de 3,5%.

8 Como plantean Bizbergue et ál. (2011), el proceso que se inició con el anuncio de la Resolución N° 125 desató una intensa confrontación que tuvo como protagonistas, no sólo al Gobierno nacional y las entidades agrarias sino que involucró además a los principales grupos mediáticos de la Argentina.

9 Para una exhaustiva descripción de las técnicas de análisis de contenido, Igartua (2006); Krippendorff (2003); Sánchez Aranda (2005) y Piñuel Raigada (2002).

Posteriormente, se elaboró un libro de códigos donde definir las variables de análisis. Para codificar las fuentes de información¹⁰ se computaron los actores involucrados en el conflicto, cuyas declaraciones fueron citadas en las notas. El análisis recayó en las primeras cinco citas textuales, a las que se aplicaron las siguientes variables: 1) tipo de fuentes (oficiales o no oficiales); 2) posición respecto de la Resolución N° 125 (a favor o en contra); 3) cercanía al partido de gobierno (oficialismo u oposición). Sobre estas piezas se realizó el análisis de este caso.

Análisis de los diarios

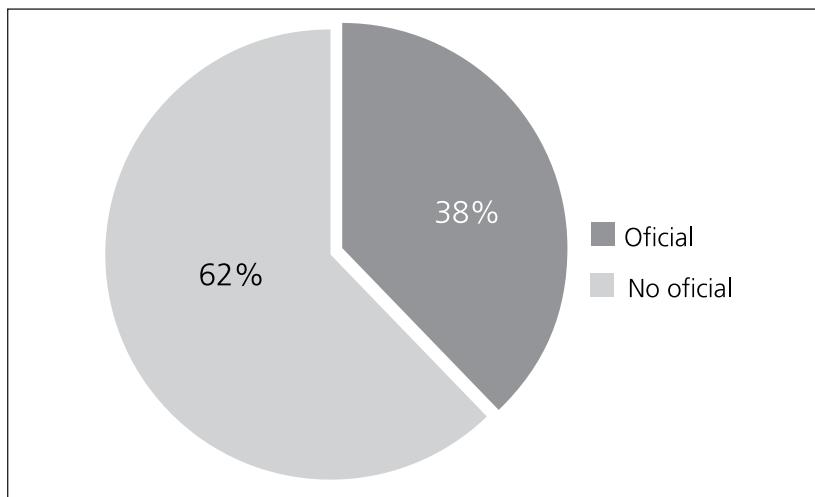
Una regla central de la teoría del *Indexing* sugiere que la diversidad de puntos de vista en las agendas mediáticas no es tal. Las diferencias entre las fuentes de información incluidas en los textos noticiosos quedan confinadas a la amplia cobertura que obtienen los tomadores de decisiones clave, pertenecientes directa o indirectamente a los gobiernos, con capacidad de incidir en las coberturas informativas. Sin embargo, cabe observar que tal divergencia también responde –aunque en menor medida– a la magnitud y contenido del conflicto en cuestión (Bennett, 1996).

En efecto, no todas las voces tienen idénticas posibilidades de dar su versión de los hechos. La información aportada por las fuentes oficiales –funcionarios o instituciones pertenecientes al ámbito estatal o gubernamental (Steele, 1997)– suele ocupar una gran parte de las agendas de los medios, dado el factor de autoridad que exhiben. Los periodistas descansan en los datos proporcionados por los actores insertos en instituciones pertenecientes a ámbitos estatales o de autoridad, a quienes se reserva la primera y la última palabra en los reportes noticiosos (Bennett, 1991). De tal recurrencia a este tipo de fuentes resulta que la versión “oficial” de los hechos se vuelve más legítima al cubrir un acontecimiento.

En el caso que aquí se estudia, sin embargo, no fueron las fuentes oficiales-estatales las que contaron con el mayor grado de participación, sino que su exposición en este matutino se vio superado por las fuentes no oficiales (ver Gráfico 1).

10 La operacionalización de las fuentes de información fue construida tomando como referencia los trabajos de Amadeo (1999) y Aruguete (2011).

Gráfico 1. Porcentajes por tipos de fuente del conflicto entre campo y Gobierno.
Clarín, marzo-julio de 2008.



Fuente: Elaboración propia.

25

En vista de estos primeros resultados se vuelve imprescindible analizar el contexto institucional de los actores relevados. Se parte de la premisa de que la posibilidad de aparición de las fuentes no oficiales depende del marco institucional en el que están insertas (Bennett, 1996). En la cobertura de este conflicto, las fuentes no provenientes del ámbito estatal fueron predominantemente las corporaciones del agro (en conjunto acapararon el 27,1% de las menciones totales). Por su parte, las cámaras empresarias, frecuentemente consultadas en relación con las situaciones de desabastecimiento, alcanzaron un aceptable nivel de apariciones (7,3%). Finalmente, los partidos políticos fueron incluidos con una frecuencia de cobertura del 6,6%, aunque los porcentajes fueron muy dispares según se tratara de partidos “oficialistas”¹¹ u “opositores”.

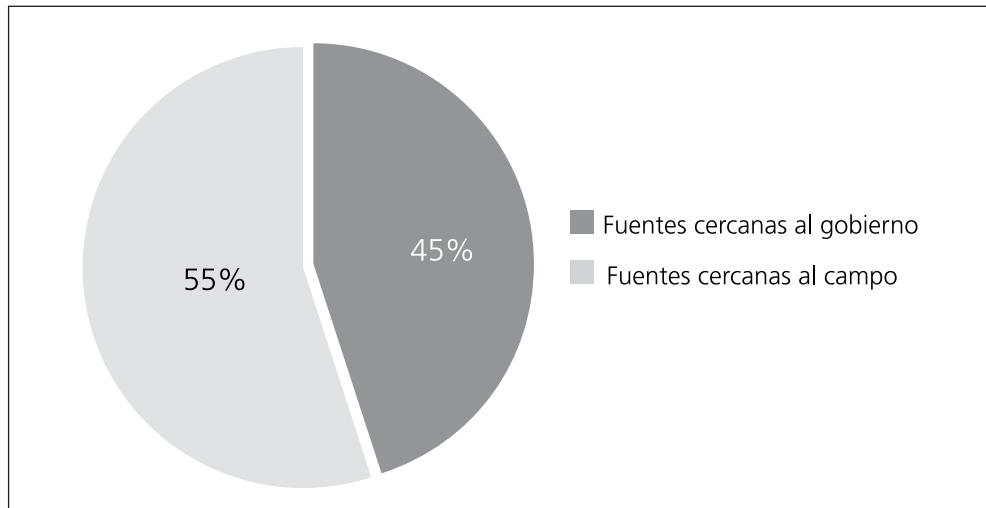
El alto nivel de exposición que alcanzaron los sectores corporativos –que, aquí particularmente, tuvieron un significativo poder de influencia en la agenda de los medios de comunicación– contrasta con la baja frecuencia de aparición de las organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, organizaciones sociales o ciudadanos), que no lograron incidir en la orientación y el tratamiento que el matutino dio a este tema.

Desde una mirada desagregada se observa una diferencia importante en la capacidad de acceso a las páginas del *Clarín* por parte de los dos actores que protagonizaron el conflicto. Confirmando el comportamiento de las fuentes oficiales y no oficiales, las declaraciones de los funcionarios del Gobierno y sectores cercanos (como la presidenta Cristina Fernández, el ministro de Economía, el Jefe de Gabinete, el Vice-

11 En este trabajo se denomina “oficialistas” o “pro-gobierno” a aquellos actores que coinciden ideológicamente y políticamente con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y apoyan sus decisiones políticas.

presidente y el propio Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2007) alcanzaron un nivel de exposición mucho menor que las voces asociadas al “campo” (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Porcentajes por tipos de fuente por sector. *Clarín*, marzo-julio de 2008.



26

Fuente: Elaboración propia.

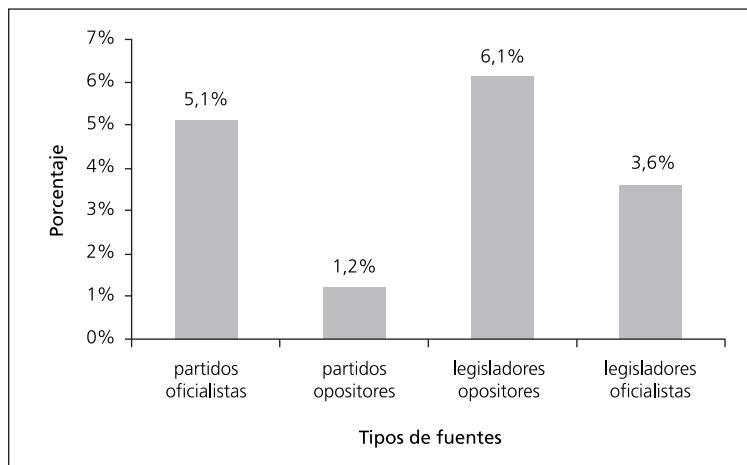
La cercanía al poder constituye otro factor que facilita a las fuentes el acceso a la agenda informativa, por lo que sería razonable esperar que aquellos sectores –externos al aparato estatal, aunque fuertemente vinculados– que acompañaron la iniciativa del Gobierno tuvieran mayor presencia en los medios. Para corroborarlo, se midió la participación diferencial que tuvieron los partidos políticos¹², entre opositores y oficialistas¹³.

En un escenario potenciado por el hecho de que el llamado “conflicto del campo” profundizó las diferencias entre los bandos partidarios que se alinearon detrás de uno u otro protagonista de la contienda, se observó la mayor polarización de fuentes: los partidos oficialistas alcanzaron un magro 1,7% de presencia frente a un 5,4% del arco opositor. Esta dispersión fue coherente con el comportamiento de las fuentes parlamentarias, incluidas dentro de las voces oficiales, donde las declaraciones de los legisladores opositores (6,1%) duplicaron a las que esgrimieron posiciones favorables a la iniciativa gubernamental (3,6%), (ver Gráfico 3).

12 Aquí los partidos políticos son codificados como fuentes no oficiales, por ello quedan excluidos los funcionarios públicos aunque sean dirigentes de los partidos analizados.

13 En la categoría “partidos oficialistas” se computa al partido de gobierno y a aquellos que acompañaron la iniciativa del Poder Ejecutivo de aplicar retenciones móviles al sector agrario.

Gráfico 3. Porcentajes por tipos de fuentes de la oposición y del oficialismo en partidos políticos y legisladores. *Clarín*, marzo-julio de 2008.



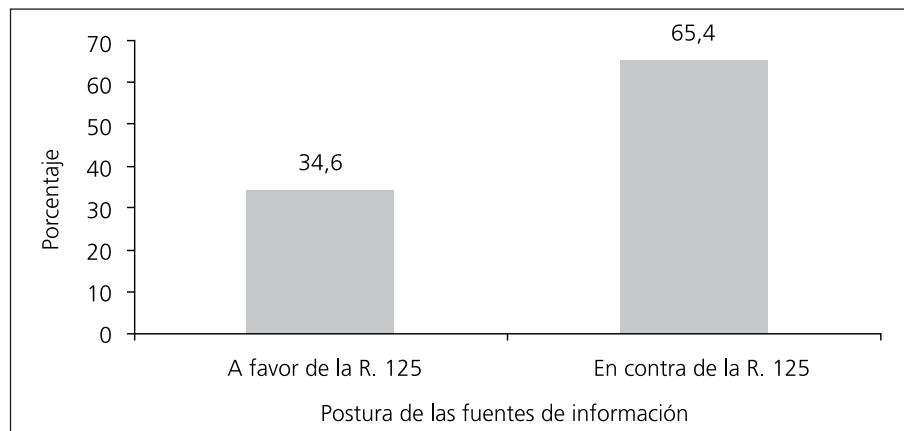
Fuente: Elaboración propia.

La notoriedad mediática que obtuvieron los dirigentes de la oposición en este contexto fue clave para posicionarse en vista de las elecciones del año siguiente. “La presencia del conflicto agrario de 2008 marcó el escenario electoral de 2009, en parte [...] por la recurrente capacidad de *lobby* de las entidades agrarias (sobre los dirigentes políticos)” (Castro García, Comelli y Palmisano, 2009: 298).

La tendencia observada hasta aquí se revierte cuando se analiza el comportamiento de ciertos sectores de la sociedad civil. Así, entre las organizaciones sociales que accedieron a la agenda mediática en calidad de fuentes de información predominaron aquellas que apoyaban la medida del gobierno de Cristina Fernández. Dos factores explican este resultado. Por un lado, el Gobierno nacional mantiene vínculos sólidos con numerosas organizaciones sociales que se manifestaron públicamente a favor de la Resolución N° 125. Por otro lado, muy relacionado con lo anterior, las retenciones móviles marcaron un punto de inflexión por la participación y compromiso populares que concitaron. En forma paralela, con excepción de algunos sectores de la izquierda más radical, los partidos políticos de la oposición que cuentan con representatividad institucional no establecieron relaciones directas con organizaciones sociales que tuvieran capacidad de convocatoria y movilización.

Finalmente, para completar el objetivo de este artículo se midió el nivel de cobertura que este periódico dio a los distintos actores sociales en función de sus manifestaciones respecto de esta política pública (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Porcentajes del posicionamiento de las fuentes de información con respecto a la Resolución N° 125. *Clarín*, marzo-julio de 2008.



Fuente: Elaboración propia.

28

Las fuentes que se expresaron explícitamente en contra de la norma casi duplicaron a aquellas provenientes de espacios que apoyaron al Gobierno en esta iniciativa. En efecto, la sospecha de que la diversidad de actores había tenido claras limitaciones quedó corroborada con el predominio de fuentes –no oficiales– representantes de sectores altamente institucionalizados y con gran poder de penetración en la agenda mediática. Este posicionamiento del diario en cuanto al manejo de sus fuentes es congruente con las argumentaciones del propio grupo mediático en sus editoriales y notas de opinión publicadas durante la etapa de mayor nivel de conflicto de este caso (Zunino, 2011; Zunino y Aruguete, 2010).

Discusión

La Resolución N° 125 marcó un punto de inflexión en la política argentina, en tanto generó un fuerte enfrentamiento –con posiciones dicotómicas– entre el Gobierno argentino y un sector de la economía tradicionalmente poderoso. No es la primera vez que una iniciativa gubernamental afecta las ganancias del sector agrario. Lo novedoso es que, en la era del agronegocio, este agente ha adquirido nuevas características. Hoy, en los *pools* de siembra y los fondos de inversión agrícola confluyen diferentes actores sociales que a partir del manejo de grandes extensiones y de la implementación de una lógica gerencial de las unidades productivas logran las escalas necesarias como para maximizar la rentabilidad de los cultivos; a la vez que desplazan a los pequeños productores a tierras marginales o los empujan directamente a la desaparición.

En forma paralela, el proceso de convergencia tecnológica y concentración económica del sector infocomunicacional argentino coincidió con una diversificación

de las inversiones de los empresarios de medios, reorientada hacia actividades comerciales externas a las industrias culturales. Concretamente, a partir de 2007, *Clarín* se asoció a *La Nación* en Expoagro, la muestra a campo abierto más importante del país. Este escenario justifica la elección de nuestro objeto de estudio: la cobertura que hizo este matutino sobre el conflicto del campo; en particular, el tratamiento dado a las fuentes de información.

Desde una mirada general, es posible ver que, más allá de la diferencia entre fuentes “estatales” y “civiles”, en la cobertura de *Clarín* predominaron las voces que apoyaron la posición de las entidades agrarias. Un análisis más detallado aporta, además, otros elementos de juicio para comprender el espacio cedido a los actores que intervinieron en esta disputa y de dar publicidad a su postura.

La decisión de operacionalizar la variable fuentes oficiales con base en la definición de Steele –funcionarios o instituciones pertenecientes al ámbito estatal o gubernamental– tiene el propósito de responder a una pregunta clave en el marco de este estudio: ¿qué sucede cuando una controversia política tiene lugar en un ámbito donde las fuentes no oficiales detentan un poder significativo, al punto de poner en riesgo la propia gobernabilidad?

Así entendido, esta forma de diferenciar entre fuentes oficiales y no oficiales permite vislumbrar la correlación de fuerzas existente entre distintos sectores de poder. En particular, entre un gobierno y un agente económico con poder de voto, donde convergen los intereses de la oligarquía argentina, de los *pools* de siembra transnacionales y de los conglomerados mediáticos más importantes del país.

Sobre los objetivos perseguidos fue posible corroborar que no hubo una amplia diversidad de voces y que la preponderancia de fuentes no gubernamentales no fue producto de una democratización de puntos de vista. Por el contrario, las fuentes con mayor exposición mediática representaron a sectores fuertemente institucionalizados, con gran capacidad de influir en las decisiones políticas de los gobiernos de turno a lo largo de la historia argentina y, coherentemente con ello, con una fuerte incidencia en la agenda mediática.

La mayor o menor diversidad de voces y puntos de vista que se evidencian en los medios de comunicación es resultado de una disputa en la que actores diversos compiten por brindar su versión de los hechos. Ello pone en cuestión la afirmación de Bagdikian (1985), ya que en este caso no fueron los funcionarios públicos, deteniendo el “monopolio noticioso”, los que mantuvieron relaciones “transaccionales” y “simbióticas” con los medios. Debido a que la disposición del Poder Ejecutivo afectaba no solo intereses del sector agrario sino del propio grupo mediático, los puntos de vista extraoficiales –fundamentalmente, del agro pampeano– adquirieron mayor importancia que la voz del Gobierno, poniendo en evidencia la existencia de intereses comunes entre el multimedios y este sector.

Bibliografía

- Albornoz, Luis (2006). *Periodismo Digital. Los grandes diarios en la red*. Buenos Aires: La Crujía.
- Amadeo, Belén (2008). "Framing: Modelo para armar". En *Los medios ¿aliados o enemigos del público? Derivaciones de las teorías de la comunicación surgidas en los setenta*, María Teres Baquerín de Riccitelli (Ed.): 183-237. Buenos Aires: Educa.
- Amadeo, Belén (1999). "La aplicación de la teoría del framing a la cobertura de la corrupción política en Argentina (1991-1996)". Disertación de Doctorado, Universidad de Navarra, Pamplona, España.
- Aruguete, Natalia (2011). *Los medios y la privatización de Entel. El tratamiento noticioso del servicio telefónico argentino en el contexto de su privatización*. Berlín: Editorial Académica Española.
- _____ (2003). "Concentración en el escenario comunicacional". *Realidad Económica* N° 199: 107-133.
- Bagdikian, Ben (1985). "The U.S. Media: Supermarket or Assembly Line?". *Journal of Communication* N° 35, Vol. 3: 97-109.
- Barsky, Osvaldo y Jorge Gelman (2009). *Historia del Agro Argentino. Desde la conquista hasta comienzos del siglo XXI*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Basualdo, Eduardo y Nicolás Arceo (2009). "Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles". En *La crisis mundial y el conflicto del agro*, Enrique Arceo, Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo (Ed.): 51-83. Buenos Aires: Editorial La Página.
- Becerra, Martín y Guillermo Mastrini (2009). *Los dueños de la palabra. Acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del siglo XXI*. Buenos Aires: Prometeo.
- Bennett, Walter Lance (1996). "An Introduction to Journalism Norms and Representation of Politics". *Political Communication* N° 13: 373-384.
- _____ (1991). *News. The Politics of Illusion*. Nueva York: Longman.
- _____ (1990). "Toward a Theory of Press-State Relations in the United States". *Journal of Communication* N° 48, Vol. 2: 103-127.
- Bennett, Walter Lance, Victor Pickard, David Iozzi, Carl Schroeder, Paso Lagos y Evans Caswell (2004). "Managing the Public Sphere: Journalistic Construction of the Great Globalization Debate". *Journal of Communication* N° 54, Vol. 3: 437-455.
- Bizbergue, Ana, Guillermo Mastrini y Martín Becerra (2011). "La Televisión Digital Terrestre en Argentina: entre la geopolítica regional y la iniciativa estatal". En *La transición a la televisión digital terrestre en Iberoamérica: diagnóstico y perspectiva*, Ángel Badillo Matos y Francisco Sierra Caballero (Eds.): 193-221. Quito: CIESPAL.
- Casermeiro, Alicia (2004). *Los medios en las elecciones. La Agenda Setting en la Ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires: Educa.

- Castro García, Celeste, María Comelli y Tomás Palmisano (2010). "Los usos del conflicto: la influencia de la Mesa de Enlace en el escenario electoral de 2009". En *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*, Norma Giarracca y Miguel Teubal (Eds.): 287-312. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.
- Crouse, Timothy (1973). *The Boys on the Bus*. Nueva York: Random House.
- Flichman, Guillermo (1977). *La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino*. México: Siglo XXI Editores.
- Gitlin, Todd (1980). *The Whole World is Watching. Mass media in the making and unmaking of the new left*. Berkeley: University of California Press.
- Hallin, Daniel, Robert Manoff y Judy Weddle (1993). "Sourcing patterns of national security reporters". *Journalism Quarterly* N° 79, Vol. 4: 753-766.
- Igartua, Juan José (2006). *Métodos cuantitativos de investigación en comunicación*. Barcelona: Editorial Bosch.
- Krakowiak, Fernando (2011). *Los nuevos debates en torno a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual*. Ponencia presentada en el X ENACOM, Viedma, Argentina.
- Krippendorff, Klaus (2003). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Newbury Park, CA: Sage.
- McQuail, Denis (1998). *La acción de los medios*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Piñuel Raigada, José Luis (2002). "Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido". *Estudios de Sociolingüística* N° 3, Vol. 1: 1-42.
- Sánchez Aranda, José (2005). "Análisis de contenido cuantitativo de medios". En *Investigar en Comunicación*, María Rosa Berganza Conde y José A. Ruiz San Román (Eds.): 207-228. Madrid: McGraw Hill.
- Steele, Janet (1997). "Don't Ask, Don't Tell, Don't Explain: Unofficial Sources and Television Coverage of the Dispute over Gays in the Military". *Political Communication* N° 14: 83-96.
- Tuchman, Gaye (1972). "Objectivity as Strategic Ritual: An Examination of News-men's Notions of Objectivity". *American Journal of Sociology* N° 77, Vol. 4: 660-679.
- VanSlyke Turk, Judy (1986). "Public Relations' Influence on the News". *Newspaper Research Journal* N° 7, Vol. 4: 15-27.
- Zunino, Esteban (2011). "La representación mediática del conflicto político: un estudio sobre la cobertura informativa del enfrentamiento entre 'gobierno y campo' en 2008". *Em Questao* Vol. 17, N° 2: 93-109.
- Zunino, Esteban y Natalia Aruguete (2012). "La responsabilidad de los actores en la cobertura mediática del conflicto: un estudio de caso a partir de la realidad argentina". *Intersecciones en Comunicación* Vol. 6, N° 1: 89-118.
- Zunino, Esteban y Natalia Aruguete (2010). "La cobertura mediática del conflicto campo-gobierno: un estudio de caso". *Global Media Journal México* Vol. 7, N° 14: 1-23.